DOMINGO 27 DE JULIO DE 2014 **EL NACIONAL**



NEGRO

pló a favor en un mercado en el que, según expertos, no es sencillo obtener licencias si se es principiante.

El negocio de las compras de atún de Ecuador para Venezuela es millonario. De ese país procede más de 90% de las importaciones del producto: las adquisiciones escalaron a un promedio anual de 106 millones de dólares y 19.000 toneladas entre 2004 y 2013, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Asiservy y otras compañías dedicadas a la exportación atunera fueron visitadas en Manta en mayo de 2012 por una comisión oficial venezolana entre cuyos integrantes se encontraban el coronel Heber Aguilar, entonces vicepresidente de Producción y Distribución de Pdval, y el mayor Andrés Morfe, para la época director de Comercialización y Logística de CA-SA. El Ministerio de Alimentación, según documentos oficiales, admitió que ese año procuró estimular las compras con el uso del Sucre, pero no precisó en qué volumen.

Negocios de peso. Más allá de los contratos para atún ecuatoriano, el fuerte de Alimentos Venenceres fue la adquisición de implementos agrícolas. La firma, según Import Genius, informó en las aduanas venezolanas sobre importaciones de por lo menos 18 millones dólares y 452 toneladas netas en 10 aranceles relacionados con ese tipo de bienes: más de 85% se concentró en 5 de esos códigos que incluyeron sistemas de riego, aparatos portátiles para agricultura, gradas de discos —que se emplean para preparar la tierra para la siembra— y máquinas para preparar alimentos para animales y de otros tipos. Las compras mayoritariamente procedían de China y Panamá y entraron al país por Puerto Cabello.

El catálogo en línea de la empresa mostraba, entre otros, productos como segadores Bush Hog y rastras Tuf Line. No se dejaba claro, sin embargo, cuáles eran los clientes a los que se había servido: tampoco esa información se señala en la ficha del Registro Nacional de Contratistas, que sólo refiere a los contratos para la venta del atún a Mercal.

Una comparación entre los datos disponibles en Import Genius y el INE sobre precios FOB –sin fletes ni seguros– puede dar una idea de la escala de las operaciones de Alimentos Venenceres. El país importó un total de 33,2 millones de dólares en sistemas de riego en 2012 y la empresa manifestó haber hecho adquisiciones por 3,9 millones de dólares. Es decir: más de 10% del total de las compras nacionales, que para ese año cayeron a prácticamente la mitad de lo adquirido en 2011. Una proporción semejante se obtiene cuando se analiza el arancel de gradas de discos. A territorio venezolano ingresaron 18,1 millones de dólares hace 2 años y la empresa declaró compras por 1,8 millones de dólares: otra vez un aproximado a la décima parte.

En el caso de los equipos portátiles de agricultura, la participación fue incluso mayor: a toda Venezuela se despacharon 16,9 millones de dólares y la firma aseguró que sus cargas tenían un valor cercano a 3,2 millones de dólares, lo que representa 20% del total. En las categorías de máquinas para elaborar alimentos para animales y de otros tipos, la importadora refrendó la compra de más de 3,7 millones de dólares y 2,2 millones de dólares, respectivamente: fueron montos equivalentes a 6% y 5% de las importaciones venezolanas. El surgimiento de nuevas empresas dedicadas al negocio de las maquinarias e implementos para las labores del campo no se tradujo, sin embargo, en mejoras duraderas para los productores. Voceros gremiales se han quejado en repetidas ocasiones de que el mercado está gravemente desabastecido y que incluso tienen que reciclar partes y piezas para poder operar: el resultado son las dificultades para producir en el campo los alimentos que demanda el país.

Cuestión de salud. Cuando se escribe el nombre de Fármacos Veneceres en los buscadores de Internet, no es posible hallar una página web de la compañía. No hay datos en línea sobre sus clientes ni sobre la naturaleza de sus actividades. Tampoco aparece la firma cuando se consulta el Registro Nacional de Contratistas, en el cual deben estar inscritas todas las sociedades mercantiles que pretendan hacer negocios con órganos del Estado.

Su nombre sugiere que se trata de una corporación farmacéutica, pero en realidad funcionó durante 2012 como una importadora de equipos médicos. Import Genius indica que la empresa declaró importaciones de por lo menos 9,8 millones de dólares a precios FOB: 6,1 millones de dólares correspondieron al código arancelario de aparatos de exploración con ultrasonido o para realizar ecografías. Un punto permite la comparación con su melliza de alimentos: las importaciones nacionales de ese tipo de equipos fueron de 56 millones de dólares. En otras palabras: la compañía manifestó que había adquirido un monto que es equivalente a más de 10% de las compras del país, según se desprende de la base de datos comercial.

Las otras importaciones fueron realizadas en aranceles correspondientes a equipos denominados electrocardiógrafos, electromédicos, aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos y a una última categoría genérica
que se denomina "Los demás". Una aparente contradicción entre los estados de situación patrimonial y
de resultados de la compañía de finales de 2012 puede advertirse si se revisa el expediente mercantil: en el
primero se señala un inventario de mercancía de casi
38 millones de bolívares, pero en el segundo se señala
que no hay mercancía disponible, a pesar de que tampoco se reportaron ventas que pudiesen agotar los inventarios. Muchos pacientes con necesidades podrán
también preguntar qué pasó.



El expediente de Alimentos Venenceres indica que su sede se encuentra el local 16 del piso 2 del Centro Comercial Otama, en la urbanización El Viñedo de Valencia. En un recorrido realizado esta semana se verificó que la oficina se encuentra vacía y en proceso de remodelación. Quienes trabajaban en las modificaciones dijeron desconocer el nombre de la compañía







El trabajo

periodístico

verificó que han

existidos casos

investigados en

Venezuela en los

que se utilizaron

registradas en

Portcullis Trustnet

empresas

El cuestionario

SIETE DIAS

Un cuestionario de 13 preguntas fue remitido a la abogada Mary Herrera, quien se identificó en una llamada telefónica como representante jurídica y asesora tributaria y aduanera de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres. A través de ella se intentó hacer contacto directo con los antiguos y actuales accionistas de las firmas, pero no fue posible lograrlo. La profesional explicó que todos estaban fuera del país o que eran de difícil localización y que estaba facultada para asumir la vocería. Declinó la oferta de una entrevista telefónica y envió el viernes su dirección de correo electrónico para que se le hicieran llegar las inquietudes periodísticas. Así se hizo, pero para el cierre de la presente edición no se había obtenido respuesta. ¿Cuáles fueron las cantidades de alimentos, implementos agrícolas y equipos médicos importados por las compañías? ¿Se usaron dólares preferenciales para las compras de atún ecuatoriano que después fue vendido a Mercal? ¿Cuáles son los otros clientes de las firmas a los que se han vendido los bienes importados con divisas entregadas por el gobierno? ¿Las relaciones de los accionistas con autoridades gubernamentales ayudaron a facilitar las gestiones ante los órganos oficiales? Herrera, antes de solicitar el cuestionario, solo había adelantado que contenedores de la compañía, con productos adquiridos con y sin dólares Cadivi, fueron inspeccionados por el gobierno v motivaron una actuación administrativa ante la cual habían apelado. Dijo además que Alimentos Venenceres tenía nuevo propietario, aunque no se localizó rastro de ninguna transacción en el registro mercantil ni en la ficha del Registro Nacional de Contratistas. Tampoco pudo pre-

cisar cuándo ocurrió la venta.

Al general Félix Osorio, quien fue reemplazado hace un mes de su cargo como ministro de Alimentación, se le enviaron cuatro mensajes esta semana a su teléfono personal y su correo electrónico. No se recibieron respuestas. A la esposa del coronel Manuel Barroso se le hizo llegar el miércoles una solicitud de entrevista para su esposo, la cual tampoco fue contestada para el cierre de esta edición. Las puertas para todos siguen abiertas.



Conexión con las Islas Vírgenes

Interpromotions Ltd y Solutions B & C Ltd son dos compañías que registró el empresario carabobeño Paul Miguel Ortega González en uno de los mayores paraísos fiscales del Caribe: las Islas Vírgenes Británicas. Los nombres de las empresas son citados en una gran base de datos que construyó el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) en 2013, gracias a una filtración de información que fue 160 veces más grande que la de Wikileaks. La organización lideró un conjunto de investigaciones a las que denominó "Off Shore Leaks" y que incluyeron un análisis de 2,5 millones de documentos, entre ellos 130.000 registros referidos a compañías que operan en paraísos fiscales y

sus clientes desplegados en 140 países. El nombre de Ortega González -de acuerdo con la base de datos de la organización periodística- es mencionado como director v accionista de Interpromotions para 2003 y como socio de Solutions B & C Ltd para 2004, aunque no se aclara si todavía está vinculado con ellas. Ambas tienen sede en Road Town y fueron creadas en Tórtola. Los datos filtrados indican que las dos sociedades fueron constituidas con los servicios de Portcullis Trustnet, consultora de asesoría financiera. Expertos aseguraron que, en realidad, se especializa en ofrecer empresas para los extranjeros, de manera expedita y confidencial. El servicio consiste en hacerlos propietarios de firmas constituidas y prestas para la venta a las que comúnmente denominan "shell-companies" o empresas-fachada: "Se usan para disimular capitales que se envían a ellas o para ahorrar impuestos gracias a las facilidades que dan las autoridades".

Ortega González se integró en 2007 como socio de la compañía Credilab, cuyo accionista mayoritario era Yamal Mustafá, empresario acusado por la Fiscalía de ser cooperador inmediato en los delitos de peculado doloso, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión de Radwan Sabbagh, ex presidente de Ferrominera del Orinoco también procesado



Los venezolanos han acudido a la isla Tórtola -una de las que componen las Islas Vírgenes Británicas- para abrir empresas off-shore

por la venta ilegal de hierro. El carabobeño también figura como socio de la empresa Alimentos Venenceres, cuya propiedad comparte con el teniente coronel retirado Carlos Arias Delgado, quien fue compañero de promoción de Manuel Barroso, antiguo presidente de Cadivi, y del general Félix Osorio, presidente de Mercal. La firma, creada en junio de 2010, recibió más de 17 millones de dólares preferenciales en 2012 y contratos para la venta de atún para la red gubernamental de alimentos. La investigación realizada por ICIJ -con el concurso de las periodistas Emilia Díaz y Marina Walter- arrojó que los venezolanos destacaban como depositantes o representantes de empresas con sede en paraísos fiscales: al menos 192 personas y 114 compañías figuraban en jurisdicciones "off shore", especialmente en las Islas Vírgenes. El trabajo periodístico verificó que han existido casos investigados en Venezuela en los que se utilizaron empresas registradas en Portcullis Trustnet para resguardar los dineros. Uno es el conocido como "La Vuelta", un esquema de fraude financiero (pirámide) contra 500 personas, dirigido por Samuel Maya en Maracaibo a través de la empresa Auto Leasing en 2005. La compañía captaba dólares -con retorno de 20% a 30%- y luego redirigía el dinero a la empresa Polaris Consulting Management.

